29

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

CITIZEN PARTICIPATION IN THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL POLICIES

Santos Pedro Cedillo Preciado¹

E-mail: scedillo@utmachala.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0214-816X>

Elmina Matilde Rivadeneira Rodríguez¹

E-mail: erivadeneira@utmachala.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0534-4905>

¹ Universidad Técnica de Machala. Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Cedillo Preciado, S. P., & Rivadeneira Rodríguez, E. M. (2020). Participación ciudadana en la gestión de las políticas educativas. *Revista Conrado*, 16(72), 210-216.

RESUMEN

Este estudio descriptivo con el objetivo de analizar la participación ciudadana en la gestión de las políticas educativas, responde al tipo de revisión bibliográfica; sistematizado a través de los métodos de investigación exegético, hermenéutico, histórico-lógico y de analítico-sintético. Entre los principales hallazgos se significa que: en el país existe un marco legal, que fundamenta la participación ciudadana en las políticas públicas y en particular en las educativas; sin embargo, aún es limitada la contribución de los miembros de la comunidad educativa y ciudadanía en general, en la contribución de ideas, acciones y control de estas políticas; participación que debe transitar por la preparación de la sociedad para este ejercicio democrático de manera activa.

Palabras clave:

Políticas públicas, políticas educativas, participación, democracia.

ABSTRACT

This descriptive study with the objective of analyzing citizen participation in the management of educational policies, responds to the type of bibliographic review; systematized through the methods of exegetical, hermeneutic, historical-logical and analytical-synthetic research. Among the main findings is that: in the country there is a legal framework that bases citizen participation in public policies and particularly in educational policies; however, the contribution of the members of the educational community and citizenship in general, in the contribution of ideas, actions and control of these policies is still limited; participation that must go through the preparation of society for this democratic exercise actively.

Keywords:

Public policies, educational policies, participation, democracy.

INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de la humanidad, el ser humano procuró su educación de manera empírica, como vía de supervivencia; ésta estaba dirigida a preparar al individuo para el ejercicio práctico de las funciones que le correspondían en la comunidad.

Con el desarrollo social logrado a través de los siglos, la actividad educativa se ha ido complejizando; lo que exige, dentro de una sociedad democrática, de la participación ciudadana como un pilar fundamental para alcanzar una educación de calidad que responda a los intereses de todos los sectores que la integran.

Razón por la cual, al hablar de educación en un sistema democrático es necesario hablar de políticas públicas que involucren a la población; tanto en el diagnóstico de la realidad y necesidades educativas del país, como en el proceso de implementación y control. Es importante conocer el impacto de dichas políticas en el sistema educativo para poder adoptar acciones que permitan redireccionarlas, en el caso necesario, hacia el cumplimiento de los fines propuestos.

La participación ciudadana en las políticas educativas es necesaria, por ser la educación esencial para el desarrollo de un país en los diferentes ámbitos: sociales, culturales, económicos y políticos; sin embargo, en la praxis se observa poca intervención y desidia de la ciudadanía (Siliézar, 2017), situación influenciada por múltiples factores, económicos, culturales, geográficos y políticos.

Además, en muchas naciones es el Estado quien decide estas políticas, siendo omitida la participación ciudadana, sin considerar que de éstas depende el futuro de la sociedad. Realidad que motivó este trabajo con el objetivo de analizar la participación ciudadana en la gestión de las políticas educativas ecuatorianas.

METODOLOGÍA

Para la ejecución de este estudio se consideró la opinión de Espinoza (2018), quien manifiesta que las investigaciones pueden ser de carácter descriptivo, dentro de las que se encuentra incurso la que se presenta por ser de tipo revisión bibliográfica, que responde al modelo cualitativo, por lo que además se emplearon los métodos histórico-lógico, exegético, hermenéutico y analítico-sintético.

El método histórico-lógico permitió el estudio de la evolución en el tiempo de la educación, según las diferentes etapas de la vida de la humanidad; así como de la participación ciudadana desde las primeras sociedades democráticas hasta nuestros días.

El ejercicio exegético permitió la interpretación de las normas que regulan las políticas educacionales en el Ecuador. La hermenéutica ayudó al examen, disquisición y comparación de los textos de los diferentes autores consultados. Por su parte, mediante el análisis se logró fragmentar la información y separar las variables de estudio para su examen a profundidad y posteriormente con la síntesis integrar estos elementos de manera resumida. Todos estos métodos contribuyeron a lograr una argumentación sólida sobre las bases teóricas estudiadas.

DESARROLLO

Las políticas públicas son una respuesta a las necesidades y situaciones problemáticas del Estado por mejorar los servicios públicos de la ciudadanía, tales como: transporte, salud, seguridad pública, servicios tributarios, educación, entre otros (Barraza & Barraza, 2016). Estas son *“el instrumento idóneo para vincular los esfuerzos privados y gubernamentales a favor de las metas colectivas”* (Vargas, 2015, p. 7). Luego éstas se originan por la necesidad social de satisfacer algún tipo de servicio público de la comunidad, que atañe tanto al sector gubernamental como al privado.

Por su parte, Jara (2015), las concibe como una guía que orienta la prioridad y voluntad política del gobierno, para modificar una situación determinada. Estas prioridades son contempladas en legislaciones que comprometen a las instituciones gubernamentales y sociales, así como a la ciudadanía, a cumplir con los derechos humanos y ambientales, para satisfacer las necesidades de la sociedad a mediano y largo plazo.

Molina (2017) considera las políticas públicas, como instrumentos, que *“fortalecen la actividad y la gestión del Estado”* (p. 65). Estas, deben contar con una planeación juiciosa y han de responder a una necesidad vigente. Para lograrlo, un elemento fundamental que toda política pública debe contener es el valor u objetivo que se va a preservar.

En general estos enunciados se refieren como políticas públicas a las normativas que establece el estado para dar solución a los problemas sociales; cuando estas políticas públicas son relativas al ámbito educativo se denominan políticas educacionales, las mismas proveen la dirección de las actividades con fines pedagógicos.

Las políticas públicas en el plano educativo son las leyes, decretos, disposiciones, reglamentos y resoluciones que dan forma a la doctrina pedagógica y fijan los objetivos, así como los procedimientos necesarios para alcanzarlos; estas normas tienen el fin de resolver problemas específicos de la educación.

Por su parte, Chávez (2018), las considera un conjunto de procesos implementados por la autoridad educativa competente y legítima, encaminados a solucionar problemáticas del sector y lograr objetivos que política o moralmente constituye una necesidad o un deseo para la sociedad o el Estado.

Del análisis de los enunciados anteriores queda claro que estas políticas son un proyecto estatal para gestionar a través del gobierno y la administración pública la solución a los problemas y las necesidades educativas de la sociedad; asimismo organizan la actividad educacional y en particular la vida interna en las instituciones educacionales (Espinoza, Toscano & Torres, 2018).

En el contexto ecuatoriano, Benito Gil (2015), las considera como instrumentos del Plan Nacional para el Buen Vivir, dándole connotación de manifestación democrática, que precisan de la participación social.

El aprendizaje es una actitud inherente a la especie humana; desde su surgimiento el hombre procuró conocer las razones de las cosas que acontecían a su alrededor a través de la observación; adaptando a su realidad los hechos acontecidos en la Naturaleza y transmitiendo a los demás las experiencias prácticas acumuladas.

Esta actividad se fue perfeccionando con el devenir del tiempo, llegando a ser una actividad intencionada que responde a intereses sociales. Ejemplo de ello lo encontramos en la Edad Antigua, etapa donde sobresalen las culturas india, china, egipcia y hebrea, donde el concepto de educación, contenidos y agentes educativos responden al contexto histórico, religioso y cultural en estas antiguas civilizaciones. Durante el primer milenio a. C. se desarrollan las diferentes *paideias* griegas; el mundo romano asimila del helenismo las experiencias del campo docente.

Respecto a la participación ciudadana en las políticas públicas, se puede observar sus antecedentes en estas civilizaciones antiguas; sus miembros se comenzaron a organizar democráticamente en Atenas, cerca del año 500 a.C. El nacimiento de la democracia propició la participación ciudadana denominada *polis* como asamblea del pueblo, pero en ésta sólo participaban los hombres, dejando el 75% de la población (mujeres, esclavos, extranjeros) fuera de cualquier decisión. Estas políticas a pesar de llamarse *democráticas*, a través del tiempo han marcado el interés del pensamiento de un grupo cuyo poder ha influido en los sistemas educativos.

En la Edad Media, con la llegada del final del Imperio Romano occidental, se asume el legado de los clásicos en el campo educativo, mediado por la doctrina cristiana,

que fue expandida por las tierras del antiguo imperio. En el siglo XVI, en la etapa del Renacimiento se origina una nueva concepción educativa, la humanista, como resultado de la recuperación del saber de Grecia y Roma, caracterizado por el disciplinarismo pedagógico.

En nuestro continente con la llegada de los europeos en el siglo XVI la Iglesia jugó un importante papel en la educación de los pueblos aborígenes, a través de la religión se logró manipular a la población y durante mucho tiempo trabajó conjuntamente con los monarcas e incluso con los gobiernos para obtener un poder inmenso.

Ya en la etapa contemporánea las actuales políticas educativas se caracterizan por la constante búsqueda de recursos pedagógicos para potenciar plenamente las capacidades intelectuales del ser humano, estas políticas son organizadas y controladas por el Estado.

En los siglos XIX y XX con la aparición de los Estados Liberales se inició la transformación de las relaciones del Estado con la educación, apartando a la Iglesia del poder y la manipulación; con la democracia liberal, la educación se consolida como derecho fundamental y social que exige la intervención activa del Estado (Barraza & Barraza, 2016).

Durante todo este tiempo las políticas públicas estuvieron en manos de los grupos que ostentaban el poder (Franco, 2014; Treviño, Villalobos & Baeza, 2016), por lo que éstas han respondido de una manera u otra a los intereses de la clase dominante a pesar del apelativo democrático.

Situación no alejada de la realidad del Ecuador; sin embargo, durante la presidencia de Vicente Rocafuerte (1835-1839), las políticas públicas basadas en ideas liberales y republicanas, se centraron en la educación pública para los aborígenes e inclusive para las mujeres, brindando a los grupos socialmente excluidos una oportunidad de libertad a través de la educación.

A partir de este momento podemos caracterizar la educación del país como un proceso sin cambios trascendentes, las presidencias de Rocafuerte, García Moreno, Eloy Alfaro, Alberto Enríquez Gallo y Arosemena no insertaron las políticas en planes integrales para asegurar su orientación unificada, ni se concretaron políticas educativas con un sentido técnico/operacional, existiendo un desequilibrio entre los avances experimentados por la ciencia y la tecnología y los contenidos curriculares.

No es hasta las primeras décadas del siglo XXI, que se inicia un proceso de cambio en las políticas educativas, se crea un marco legal regulatorio de éstas que tiene como piedra angular la Constitución de la República del 2008.

Podemos decir que el sistema educativo ecuatoriano ha transitado por dos etapas, la primera caracterizada por políticas educativas centradas en la alfabetización y en la actual, enfocada en una educación intercultural e inclusiva y en formar personas con pensamiento crítico-reflexivo que participen activamente en su rol de ciudadanos.

A pesar que la educación es un derecho humano fundamental, y por lo tanto debe ser asumido de forma democrática, durante largo tiempo, y aún en día, en muchos países las políticas públicas son diseñadas sin una participación activa de la ciudadanía (Beech & Meo, 2016); son manejadas como políticas de gobierno, ocasionando la fragmentación de la gestión educativa, impidiendo la sistematización de un plan a largo plazo, al no existir una secuencia entre las políticas de los gobernantes que se suceden.

Estas políticas siguen ancladas en el paradigma ortodoxo del estado-nación, por lo cual se ha distorsionado el papel ciudadano como centro de análisis y participación, desconociendo las nuevas perspectivas de la sociología-política y cosmopolita, donde son importantes quiénes participan, cómo participan, con qué objetivos, cuáles son los intereses en juego, quién gana y quién pierde.

Curiosamente, por otra parte, existe una tendencia a direccionar las políticas educativas al cumplimiento de los lineamientos de organismos e instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tienen entre sus objetivos contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Pero también en estas políticas influyen las empresas multinacionales, que usan mecanismos de mercado para abordar problemas sociales, donde intervienen factores económicos, ocasionando el desequilibrio entre los fines educativos y los financieros, inclinando la balanza hacia estos últimos.

Lo que no en pocas ocasiones ha ocasionado el recorte presupuestario para la gestión educativa, el cierre de escuelas públicas, la asimetría entre la enseñanza pública y privada, entre otros males.

Lo que evidencia el olvido de que las políticas públicas implican la adecuación de mecanismos participativos en todas las etapas de su ciclo: planificación, ejecución, seguimiento y evaluación (Pastor, 2015); así como la consideración de que en todo proceso democrático la participación ciudadana es un elemento primordial, mediante el cual la población, comparte las decisiones sobre los asuntos que les afectan con los actores gubernamentales e inciden en ellas.

La participación es sin duda uno de los elementos constitutivos de la vida democrática a través de la cual el ciudadano común puede y debe participar ya sea individual o colectivamente en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental (Pastor, 2015). Cabe entonces preguntarnos, ¿cuál ha sido la situación de la participación ciudadana en las políticas educacionales en nuestro país?

La participación social aparece como un componente central de la política pública y como un nuevo ámbito de la institucionalidad pública a partir de los procesos de redefinición institucional que se dieron durante las décadas de los años 80 y 90 del pasado siglo.

En los años 80 se experimenta en el Ecuador modificaciones en los procesos de intermediación entre la sociedad y el Estado, a la vez que se produce la descentralización y desconcentración de la gestión pública, contexto en el cual emerge la participación social como alternativa de representación política; se producen importantes procesos de movilización ciudadana de desconfianza hacia la representación política desde una perspectiva tecnocrática e instrumental.

Ya en los años 90, esta postura de los movimientos sociales evoluciona hacia una participación con un concepto político más afín a los parámetros de un tipo de democracia directa y participativa, donde son los actores sociales los que toman acción en los procesos de decisión de la gestión política en busca del mejoramiento social.

En los primeros años de la actual centuria se produce en nuestro país un hecho sin precedentes de participación ciudadana, la proclamación de la Constitución de la República en el 2008; donde en ejercicio democrático fue consultada a la población y posteriormente aprobada, y con ella las legislaciones que fundamentan el sistema de educación del país.

Este hecho inédito antes en el Ecuador, constituye un hito de participación ciudadana activa en las políticas públicas de la nación; que demuestra, al margen de cualquier limitación, que cuando existe voluntad política, se pueden propiciar los espacios, formas y medios necesarios.

Ahora bien, para promover la participación ciudadana se requiere por parte del Estado generar la institucionalización de la misma, favoreciendo la capacidad de organización colectiva y potenciando los márgenes de poder de la sociedad para implicarse en la acción pública y generar los mecanismos institucionales que aseguren el cumplimiento pleno del derecho a la participación a la sociedad

civil (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012).

Al respecto se han promulgado normas como la Ley Orgánica de participación ciudadana (2010), con el objetivo de *“propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social”*. (Ecuador. Asamblea Nacional, 2010)

En este artículo se recoge el propósito del Estado ecuatoriano por fomentar la participación ciudadana; pero para lograrla se impone la preparación de la ciudadanía, lo que también es preocupación del Estado, así lo demuestra al disponer en el propio articulado de esta ley que *“el Estado fomentará la participación ciudadana a través de sus instituciones, en todos los niveles de gobierno, mediante la asignación de fondos concursables, becas educativas, créditos y otros, a fin de que, las organizaciones sociales realicen proyectos y procesos tendientes a formar a la ciudadanía en temas relacionados con derechos y deberes, de conformidad con la Constitución y la ley”*. (Ecuador. Asamblea Nacional del Ecuador, 2010)

Sin embargo, en la actualidad, la democracia latinoamericana ha incrementado la brecha entre lo social y lo político, expresado en el fomento de la sociedad civil (lo privado), como negación del Estado; y por lo tanto, como negación de la política que a su vez se manifiesta en la reducción del papel de las instituciones públicas y sus actores, en la administración de la participación política y la funcionalización (Escobar, 2017). Realidad que es preciso no irradie sus influencias al actual contexto político ecuatoriano como factor de involución en la aún limitada participación social.

Como ya hemos apuntado, en los últimos años, el Estado ecuatoriano ha creado un marco legal para la implementación de políticas públicas, la promoción de programas e iniciativas para que a partir de la escuela se enfrenten otros problemas sociales como la violencia, la pobreza,

el hambre, la desnutrición; así como las sustanciosas inversiones que se han depositado para mejorar la infraestructura de los centros educacionales (Chávez, 2017). Así encontramos que en la Carta Magna se consagra la participación social en las políticas educativas, al expresar que:

“En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para:

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.
2. *Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.*
3. *Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.*
4. *Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social.*
5. *Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación”*. (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2016)

Postulado que es concretado a través de la promulgación de leyes y códigos como la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en el 2010 y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Ecuador. Asamblea Nacional, 2011) como sistematización de las legislaciones constitucionales.

De esta forma en la LOEI se estipula como uno de los principios de la educación la participación ciudadana: *“La participación ciudadana se concibe como protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las capacidades y la provisión de herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva”*. (Ecuador. Asamblea Nacional, 2011)

Es importante poder lograr la formación ciudadana en este sentido, particularmente de los miembros de la comunidad educativa, que de manera directa están involucrados en el sistema educacional, por lo que su participación es decisiva para contribuir a elevar la calidad y eficiencia del proceso educativo (Espinoza & Tinoco, 2018).

La participación de la familia es fundamental para la toma de decisiones; es preciso que expongan sus ideas,

opiniones y criterios sobre la educación que desean para sus hijos y cómo desean que sea el futuro del país.

De igual manera el estudiantado es considerado un actor clave dentro de los procesos participativos relacionados al ámbito educativo. Al brindar sus criterios en cuanto a la forma que desean ser educados, estos sirven de retroalimentación sobre la implantación de las políticas educacionales, para lo cual es preciso que se sensibilice, reconozca y practique el proceso democrático de organización social en pro de sus derechos y cumplimiento de sus deberes para la mejora de los ambientes de convivencia escolar y optimizar el buen uso de los bienes públicos (Ecuador. Ministerio de Educación, 2019); por otro lado, este proceso participativo sirve de formación de la conciencia ciudadana de las nuevas generaciones de ecuatorianos.

Por su parte, los docentes y directivos deben aplicar las disposiciones establecidas de forma crítica y reflexiva, contribuir al mejoramiento de las políticas implementadas y controlar su cumplimiento.

A pesar de las políticas educativas existentes, aún es limitada la participación de los miembros de la comunidad educativa y la ciudadanía en general, en la contribución de ideas, acciones y control de estas, para que así respondan a los intereses y necesidades de los ecuatorianos; participación que debe transitar por la preparación de la sociedad para que practique este derecho de manera activa en la gestión educativa (Chávez, 2017).

CONCLUSIONES

Las políticas públicas en el plano educativo son las leyes, decretos, disposiciones, reglamentos y resoluciones que dan forma a la doctrina pedagógica y fijan los objetivos, que política o moralmente constituye una necesidad o un deseo para la sociedad o el Estado; así como los procedimientos necesarios para alcanzarlos y resolver los problemas específicos de la educación.

En el contexto ecuatoriano son instrumentos del Plan Nacional para el Buen Vivir, que precisan de la participación ciudadana. El sistema educativo en el Ecuador ha transitado por dos momentos, el primero caracterizado por políticas educativas centradas en la alfabetización y la actual, enfocado en una educación intercultural e inclusiva y en formar personas con pensamiento crítico-reflexivo que participen activamente en su rol de ciudadanos.

En el país existe un marco legal, que fundamenta la participación ciudadana en las políticas públicas y en particular en las educativas, que tiene como piedra angular la Constitución de la República de 2008, sistematizada a través de leyes como: Ley Orgánica de participación

ciudadana, Ley Orgánica del Consejo de participación ciudadana y control social, la LOEI, la LOES, entre otras.

A pesar de este marco legal, aún es limitada la participación de los miembros de la comunidad educativa y la ciudadanía en general, en la contribución de ideas, acciones y control de estas políticas, para que así respondan a los intereses y necesidades de los ecuatorianos; participación que debe transitar por la preparación de la sociedad para el ejercicio democrático de este derecho, de manera activa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barraza-Soto, I., & Barraza-Barraza, L. (2016). *Políticas Públicas en Educación. Su Implementación*. Red Durango de Investigadores Educativos A. C.
- Beech, J., & Melo, I. (2016). Explorando el uso de las herramientas teóricas de Stephen J. Ball en el estudio de las políticas educativas en América Latina. *Education Policy Analysis Archives*, 24(23), 1-19.
- Benito Gil, V. J. (2015). *Las políticas de educación en Ecuador como una de las manifestaciones e instrumentos del Plan Nacional para el Buen Vivir*. (Tesis doctoral). Universitat d'Alacant.
- Chávez, V. (2018). Incidencia de las políticas públicas en la calidad del sector educativo ecuatoriano. *Revista de Educación*, 9(13), 21-44.
- Ecuador. Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). *Ley Orgánica de participación ciudadana. (Modificaciones)*. Registro Oficial No. 175. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org6.pdf
- Ecuador. Asamblea Nacional del Ecuador. (2011). *Ley Orgánica de Educación Intercultural*. Registro Oficial No 417. https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_le-yeducacionintercultural_ecu.pdf
- Ecuador. Asamblea Nacional. (2016). *Constitución de la República del Ecuador. (Modificaciones)*. http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documentos/old/constitucion_de_bolsillo.pdf
- Ecuador. Ministerio de Educación. (2019). *Estándares de calidad educativa 2019. Ecuador*. Manual de implementación. Ministerio de Educación.
- Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2012). *La Participación Ciudadana. Para la vida democrática*. <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/La-participación-Ciudadana.pdf>

- Escobar, A. (2017). Participación ciudadana y políticas públicas. Una problematización acerca de la relación estado y sociedad civil en América latina en la última década. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, 8, 97-108.
- Espinoza, E. (2018). El problema de investigación. *Revista Conrado*, 14(64), 22-32.
- Espinoza, E., & Tinoco, W. (2016). Retos para la construcción de la sociedad del aprendizaje en la universidad ecuatoriana. *Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación*, 4(2), 60-67.
- Espinoza, E., Toscano, D., & Torres, S. (2018). Gestión de las tecnologías de la información; un desafío del ámbito académico universitario en el Siglo XXI. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. Edición Especial.
- Franco, J. (2014). ¿Qué son las políticas públicas? <https://www.iexe.edu.mx/blog/que-son-las-politicas-publicas.html>
- Jara, R. V. (2015). Apuntes para una reflexión crítica de la política de Educación actual en el Ecuador desde la visión de CTS. *Ciencia Tecnología y Sociedad*, 34-57.
- Molina, S. (2017). ¿Qué busca el Estado con una política pública? Dinámica de las políticas públicas y los valores entre las instituciones estatales. *IUSTA*, 1(46), 63-84.
- Pastor, E. (2015). Oportunidades de participación en las políticas de servicios sociales municipales en España. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, 22(68), 229-257.
- Siliézar, D. (2017). Incidencia de la participación ciudadana en educación en el contexto salvadoreño. *Diálogos*, 11(19), 7-24.
- Treviño, E., Villalobos, C., & Baeza, A. (2016). *Recomendaciones de Políticas Educativas en América Latina en base al TERCE ha sido elaborado por encargo de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe*, OREALC/ UNESCO. <https://www.gcedclearinghouse.org/resources/educational-policy-ecommendations-based-terce?language=es>
- Vargas, A. (2015). *Gobernanza y Gestión pública. Diseño e implementación de políticas públicas*. Diplomado en Gobernanza. SNTE.